



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, 13 de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

PROCESO:	PROCESO ORDINARIO
REFERENCIA:	SOLICITUD PERDIDA DE COMPETENCIA
DEMANDANTE:	JAIME HERNANDO OBANDO AGUIRRE
DEMANDADO:	COLPENSIONES
RADICADO:	050013105 – <u>002202100126-01</u>

Dentro del proceso presentado por el señor **JAIME HERNANDO OBANDO AGUIRRE** en contra de **COLPENSIONES**, el apoderado de la parte demandante solicita se declare la pérdida de competencia para continuar el proceso aduciendo que desde la admisión del recurso ha transcurrido más de 6 meses sin que se profiera sentencia¹, invocando el **artículo 121** del Código General del Proceso en el que se dispone:

“el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal”

Pues bien, en relación con la aplicación de esta disposición normativa del Código General del Proceso, debe señalarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha advertido que en relación con las normas adjetivas laborales no son aplicables los artículos 117 y 121 del CGP, por cuanto la integración que admite el artículo 145 del CPTSS se refiere a aquellos casos en los cuales haya carencia de disposiciones de la especialidad, reiterando en la sentencia **SL 4250-2022** lo dicho en la **SL2408-2022** y **SL1163-2022**.

Del mismo modo, en sentencias proferidas en el marco de procesos constitucionales, a Alta Corporación ha determinado de forma reiterada que la pérdida de competencia prevista en el artículo 121 del Código General del Proceso no es aplicable en materia laboral, señalando en la **STL17114-2023** lo siguiente:

En lo que respecta al argumento de que debe aplicarse el artículo 121 del Código General del Proceso en el trámite judicial cuestionado, debe indicarse que, entre otras, en sentencias CSJ STL12485-2022, CSJ STL15942-2022 y CSJ SL1163-2022, **esta Sala de Casación ha determinado de forma reiterada que la pérdida de competencia prevista en aquella disposición no es aplicable en materia laboral (resalto fuera del texto original)**. En efecto, en la última de las providencias en cita, la Corte señaló:

¹ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 16

[...] el Tribunal no incurrió en la infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, comoquiera que estas disposiciones no son aplicables al procedimiento laboral, toda vez que no se dan los supuestos del art. 145 del CPTSS para acudir por analogía a la aplicación de tales preceptos, ya que el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social tiene su propia regulación para garantizar a toda persona su derecho «...a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter» (nl. 1º del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Sin el ánimo de ser exhaustivos en relacionar todos los mecanismos adecuados que prevé el procedimiento del trabajo y seguridad social para brindar las debidas garantías judiciales a las partes, a manera de ejemplo, se rememora que el art. 48 del CPTSS prevé que el juez asumirá la dirección del proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. Igualmente, los arts. 30 y 71 ibidem prevé lo que debe hacer el juzgador en caso de que una o ambas partes sean contumaces. Además, está previsto que las actuaciones procesales y la práctica de pruebas en las instancias se llevarán a cabo oralmente, en audiencia pública, so pena de nulidad, art. 42, ibidem.

En fin, el procedimiento del trabajo y seguridad social tiene sus propios mecanismos adecuados para ofrecer a las partes las garantías judiciales debidas, por lo que no se debe acudir a los arts. 117 y 121 del CGP, puesto que no hay un vacío legal que deba suplirse con estas disposiciones, en tanto que el art. 145 del CPTSS solo autoriza acudir al Código General del Proceso a falta de disposiciones en la especialidad. Inclusive, el mismo art. 1 del CGP reconoce que ese código regula la actividad procesal «en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios» y que se puede aplicar a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, «en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes».

Además, la Sala considera que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, puede adoptar distintas medidas que sean adecuadas para brindar a toda persona las garantías judiciales debidas, atendiendo la especialidad de los derechos sustanciales que van a ser objeto de adjudicación por parte de los jueces, por lo que no necesariamente debe hacerlo de igual forma en todos los casos.

En ese orden, si dentro del proceso laboral y de seguridad social no existe una regla similar al art. 121 del CGP, ello no significa necesariamente que hay una laguna normativa que deba suplir el juez, puesto que el legislador tiene adoptados otros mecanismos que sirven para la misma finalidad, según la especialidad del derecho, como son los previstos en el procedimiento laboral y de la seguridad social.

La pérdida de competencia del juzgador por no dictar la sentencia dentro de un plazo razonable que prevé el art. 121 del CGP no es la única forma de hacer efectivos los principios de celeridad y la garantía del plazo razonable, inclusive, puede llegar a ser contraproducente, como lo previó la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-443-2019, cuando analizó el alcance del artículo 121 del CGP y declaró inexecutable la expresión «de pleno derecho» contenida en el inciso sexto de dicho artículo y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que «...la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso».

Resta decir que la Sala no desconoce la sentencia del Corte Constitucional T-334-2020 donde adocrinó que el art. 121 del CGP sí es aplicable al procedimiento laboral y de seguridad social, sin embargo, por las razones antes expuestas, no comparte esa postura, y la misma solo produce efectos inter partes.

En razón a lo anterior, **no se encuentra procedente acceder a lo solicitado por el apoderado de la activa**, y ante los memoriales dirigidos a solicitar el impulso de la actuación, se hace necesario advertir las razones subjetivas que han llevado a la Magistrada Ponente a que no se haya proferido aún la decisión de fondo: **i) El proceso fue repartido en esta instancia el 31 de octubre de 2022². Mediante auto del 05 de Julio**

² CARPETA SEGUNDA INSTANCIA- ARCHIVO 01

de 2023³ se **avocó conocimiento** y **corrió traslado común** para que las partes presentaran alegatos, con intervención de la activa⁴; **ii)** De acuerdo con el reporte de estadística del último trimestre del año 2023, para ese momento cursaban en el Despacho **592 procesos**, durante este año 2024 hasta la fecha de la presente providencia se han tomado **52 decisiones** de fondo, entre las que se cuentan sentencias en procesos de trámite ordinario, constitucional y autos interlocutorios en procesos ordinarios y ejecutivos. Los procesos abordan temas diferentes y todos son complejos y no permiten una decisión simple o ligera, demandan tiempo para su estudio y para la elaboración de la ponencia.

En conclusión, el motivo por el cual no se ha proferido la decisión de segunda instancia dentro del proceso es la congestión judicial y el cúmulo de trabajo, mas no la falta de diligencia de la funcionaria judicial. El proceso está a Despacho y **de acuerdo con la programación del Despacho se proferirá la decisión de fondo.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La Magistrada,


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 040 del 14 de marzo de 2024

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-Medellín-sala-laboral/125>

³ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA- ARCHIVO 06

⁴ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA- ARCHIVO 08